

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C. nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	11001 33 35 029 2022 00119 00
DEMANDANTE:	DIANA MARCELA ÁVILA TORRES
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
CONTROVERSIA:	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Ocupa al Despacho el estudio de la conciliación extrajudicial de la referencia, en aplicación de los artículos 59 de la Ley 23 de 1991, 70 de la Ley 446 de 1998 y 49 de la Ley 640 de 2001, para determinar si es competente para conocer del asunto, y de ser así, establecer si debe aprobar o improbar dicho acuerdo conciliatorio.

I. ANTECEDENTES

La señora DIANA MARCELA ÁVILA TORRES, actuando por intermedio de apoderada judicial, llama a conciliación a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, para conciliar el pago de la sanción causada por la mora en el pago de las cesantías, conforme a lo normado en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006.

El conocimiento de la solicitud de conciliación prejudicial le correspondió a la Procuraduría 132 Judicial II para Asuntos Administrativos.

II. HECHOS

1. El 27 de noviembre de 2018, la señora Diana Marcela Ávila Torres, solicitó el reconocimiento y pago de la cesantía parcial.

2. La Secretaría de Educación de Bogotá – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Resolución No. 2190 del 26 de marzo de 2019, reconoció y ordeno pagar la prestación solicitada.

3. La entidad dejó a disposición el dinero para el pago de la prestación el quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

III. ACTUACION PROCESAL

1. Por intermedio de apoderada judicial, la señora DIANA MARCELA ÁVILA TORRES, elevó solicitud ante la Procuraduría Judicial II - Reparto para Asuntos Administrativos, con el fin de que le fuera cancelada la sanción legal establecida por la mora en el pago de las cesantías parciales solicitadas.

2. Por Reparto la conciliación correspondió a la Procuraduría 132 Judicial II para Asuntos Administrativos, quien por auto de fecha del 23 de febrero de 2022, dio inicio al trámite de solicitud de conciliación prejudicial teniendo como convocado al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y admite la solicitud de conciliación extrajudicial, y fija el veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022), para la evacuación de la misma.

3. Finalmente, el veintiuno (21) de abril hogaño, se llevó a cabo la audiencia de conciliación.

IV. PRUEBAS

Obran como pruebas que fundamentan la conciliación extrajudicial, las siguientes:

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de la convocante, poder otorgado al abogado Yohan Alberto Reyes Rosas y documentos del poderdante y apoderado.
2. Resolución No. 2190 del 26 de marzo de 2019, por medio de la cual la Secretaria de Educación de Bogotá, reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial a la docente Diana Marcela Ávila Torres.
3. Comunicación del 21 de julio de 2021, de Fiduprevisora S.A. con referencia Solicitud de certificación de pago de cesantía, en donde se señala que el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio programó pago de cesantía parcial reconocida en resolución No. 2190 del 26 de marzo de 2019, quedando los recursos a disposición el 15 de mayo de 2019.

4. Derecho de petición elevado por la convocante Diana Marcela Ávila Torres, a la entidad convocada solicitando el pago de la sanción moratoria.
5. Acta suscrita por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, en la cual se establecen las condiciones a conciliar, en los siguientes términos:

“ ...

De conformidad con las directrices aprobadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, las cuales se encuentran recogidas en el Acuerdo No.001 de 1 de octubre de 2020 «Por medio del cual se recogen las políticas, lineamientos, directrices, parámetros y reglas aprobados por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional en asuntos relacionados con la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» aprobado en sesión No.41 de 1 de octubre de 2020, modificado por el Acuerdo No.001 de 1 de febrero de 2021 «Por el cual se modifica el numeral 3.4. del artículo 3 del Acuerdo No.001 de 1 de octubre de 2020», y conforme al estudio técnico presentado al comité de conciliación en el cual se informó que no se han realizado pagos administrativos por concepto de la obligación de que trata la presente certificación, la posición del Ministerio es CONCILIAR en la audiencia programada por el Despacho con ocasión a la convocatoria a conciliar promovida por DIANA MARCELA AVILA TORRES con CC40041298 en contra de la NACION -MINISTERIO DE EDUCACION -FOMAG, cuya pretensión es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías (CESANTÍA PARCIAL PARA ESTUDIO) reconocidas mediante Resolución No. 2190 de 26 de marzo de 2019. Los parámetros de la propuesta son los siguientes:

Fecha de solicitud de las cesantías: 27 de noviembre de 2018

Fecha de pago: 15 de mayo de 2019

No. de días de mora: 66

Asignación básica aplicable: \$3.511.122

Valor de la mora: \$7.724.442

Propuesta de acuerdo conciliatorio: \$6.951.997(90%)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, numerales 3.2 y 3.5 del Acuerdo No.001 de 1 de octubre de 2020, la presente propuesta se encuentra estructurada conforme a la información suministrada en la convocatoria a conciliar, en razón a que la sanción moratoria es un derecho de carácter discutible y conciliable, que se reclama a través de la denominada justicia rogada. Lo anterior, atendiendo a que corresponde a las entidades estatales la salvaguarda del patrimonio público.

Tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación: 1 MES (DESPUÉS DE COMUNICADO EL AUTO DE APROBACIÓN JUDICIAL). No se reconoce valor alguno por indexación.

La presente propuesta de conciliación no causará intereses entre la fecha en que quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se haga efectivo el pago...”

6. Acuerdo conciliatorio suscrito por el Procurador 3ª Judicial II para Asuntos Administrativos y los apoderados de las partes.

V. ACUERDO CONCILIATORIO

El acuerdo conciliatorio cuya aprobación se pretende, está contenido en Acta de Conciliación Extrajudicial con Radicación No. 2022-81453 del 21 de abril de 2022.

En aquella diligencia de conciliación, se concedió el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante; quien se ratificó en sus pretensiones, y señaló *“...frente a la propuesta de la convocada, aceptamos haciendo énfasis en que se trata de un acuerdo total.”*.

En atención a lo anterior, y a la decisión tomada por el comité de conciliación del Ministerio de Educación, citado en precedencia, la Procuraduría 132 Judicial II, consideró:

*“(...)
En atención a las intervenciones precedentes y teniendo en cuenta que las mismas reflejan la consolidación de un acuerdo conciliatorio total, considera el Despacho que en su aspecto formal se encuentra ajustado a derecho por cuanto la fórmula propuesta por la entidad convocada y aceptada por el extremo convocante contiene obligaciones claras, expresas y exigibles en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento, comoquiera que es claro en relación con el concepto conciliado (sanción moratoria), su cuantía y el plazo acordado para el pago..”*

Respecto a los requisitos de la conciliación, la Procuraduría 132 Judicial II, refirió:

“De igual modo se observa que, el acuerdo reúne los siguientes requisitos:

(i) El eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998), por cuanto al recaer la controversia sobre la legalidad de un acto ficto, la pretensión no está sujeta a este fenómeno procesal;

(ii) El acuerdo conciliatorio versa sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998), toda vez que el núcleo de la controversia no se encuentra relacionado con un derecho salarial o prestacional de aquellos que son irrenunciables, sino que versa sobre una sanción derivada de la mora en el reconocimiento y pago de una prestación que, por lo mismo, es de naturaleza disponible por los convocantes;

(iii) Las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar, de conformidad con los poderes y memoriales de sustitución de poder que reposan en el expediente;

*(iv) Obra en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, así:
(...)*

(v) Por último, considera este Despacho que el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes se ajusta integralmente a las reglas jurisprudenciales definidas en la Sentencia de unificación de jurisprudencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018 proferida por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, de tal suerte que no solo es ajustado a derecho sino que adicionalmente favorece al patrimonio público

en cuanto es menos oneroso de lo que resultaría la resolución judicial del conflicto, evento en el cual se avizora una altísima probabilidad de condena, habida cuenta de los antecedentes facticos de la controversia y de su respaldo probatorio arrimado con la solicitud de conciliación.

En este punto conviene resaltar que a la luz de las reglas jurisprudenciales previamente referidas, luce claro para el Ministerio Público que el plazo para el pago efectivo de la cesantía solicitada por la señora DIANA MARCELA ÁVILA TORRES venció el 09 de marzo de 2019 y comoquiera que los recursos relacionados con este concepto fueron puestos a su disposición el 15 de mayo de 2019, es forzoso concluir que durante el periodo comprendido entre el 09 de marzo de 2019 y el 15 de mayo de 2019 se produjo la mora de que trata la ley 1071 de 2006 y, por lo mismo, hay lugar al pago de la sanción moratoria durante el periodo liquidado por la entidad convocada en la propuesta que se allega, operación que al tener como base un porcentaje inferior a la totalidad que estaría llamada a pagar en el evento de una condena judicial, resulta favorable para el patrimonio público, amén de que no están dados los presupuestos señalados en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social para que se configure la extinción de la sanción por causa de la prescripción.

Por las razones expuestas, se avala por parte de este Agente del Ministerio Público el acuerdo celebrado en esta audiencia, máxime que el mismo es resultado visible de las mesas de trabajo que en asocio con la entidad convocada se han venido adelantando por parte de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, de tal suerte que al ser respetuoso de las disposiciones legales y de los precedentes jurisprudenciales consolidados en la materia, se solicita, comedidamente, al señor Juez Administrativo se sirva impartirle aprobación.”

VI. CONSIDERACIONES

Esta Sede Judicial es competente para pronunciarse sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado el 21 de abril de 2022, entre la señora DIANA MARCELA ÁVILA TORRES y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONCILIACIÓN.

Debe recordar el Despacho que la conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa ha sido instituida como un mecanismo alternativo de solución de conflictos con el ánimo de lograr (cuando a ello hubiere lugar) un acuerdo entre las partes y así evitar el uso de acciones contenciosas en vía judicial, o en su defecto, servir como requisito de procedibilidad para la iniciación de aquellas.

Conforme a la normatividad vigente, la CONCILIACIÓN es la manifestación de la voluntad de las partes, en este caso extrajudicial, ante un conflicto originado por actividad administrativa o en ejercicio de aquella, con refrendación del Procurador Judicial, la cual sólo surte efectos jurídicos con la ejecutoria de la decisión

jurisdiccional que la aprueba. Esta decisión tiene efectos de COSA JUZGADA y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO (Artículo 13 del Decreto 1716 de 2009).

Desde la expedición de la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001, la conciliación se extendió hasta el campo de esta jurisdicción, siendo procedente únicamente sobre aquellos conflictos de carácter particular y contenido económico que se encuentren en el ámbito de su competencia, susceptibles de ser enjuiciados con ocasión de las acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contractuales, y de reparación directa. Lo anterior, por estricto mandamiento del artículo 59 de la mencionada Ley 23 de 1991, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ARTICULO 59. Modificado por el art. 70, Ley 446 de 1998 Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.”

En desarrollo de las normas referenciadas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 *“Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”*, obra que contiene la ordenación que rige el procedimiento conciliatorio extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo.

Así pues, ha de observarse que la solicitud de conciliación haya reunido los requisitos establecidos por el artículo 6 del Decreto 1716 de 2009, que son los siguientes:

- “(…)*
- a) La designación del funcionario a quien se dirige;***
 - b) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;***
 - c) Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan;***
 - d) Las pretensiones que formula el convocante;***
 - e) La indicación de la acción contencioso administrativa que se ejercería;***
 - f) La relación de las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso;***
 - g) La demostración del agotamiento de la vía gubernativa, cuando ello fuere necesario;***
 - h) La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;***
 - i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos;***
 - j) La indicación del lugar para que se surtan las notificaciones, el número o números telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes.***
 - k) La copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado, en la que conste que ha sido efectivamente recibida por el representante legal o por quien haga sus veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso de que se trate de persona natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla;***

*l) La firma del apoderado del solicitante o solicitantes;
(...)"*

De la misma manera, el Decreto No. 1365 del 27 de junio de 2013 “por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 1564 de 2012, relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, establece:

“Artículo 4. Entrega de copia de solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En desarrollo del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, el peticionario que solicite conciliación extrajudicial deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente Decreto”.

Igualmente, de conformidad con el marco jurídico vigente, para efectos de impartir la aprobación prevista en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, el juez de conocimiento debe verificar que el acuerdo conciliatorio:

- a.** Verse sobre un asunto conciliable.
- b.** No afecte derechos fundamentales, ni atente contra el ordenamiento jurídico.
- c.** No sea lesivo para el patrimonio público.
- d.** No haya tenido como objeto asuntos en los cuales la acción a precaver se encuentre caducada.

2. CASO CONCRETO

En el caso objeto de análisis tenemos que:

2.1. La solicitud de conciliación extrajudicial elevada por la convocante y que obra en el expediente digital, cumple con los requisitos señalados por el Decreto 1716 de 2009.

2.2. El asunto aquí debatido es perfectamente conciliable, por cuanto si bien es cierto, los derechos laborales vistos a la luz de la Carta Constitucional de 1991 son derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, también lo es que se puso en discusión y que fue objeto de arreglo entre las partes involucradas, el derecho que le asiste a la señora DIANA MARCELA ÁVILA TORRES, frente al pago de la sanción moratoria como consecuencia del pago de las cesantías parciales, fuera de los términos legales.

2.3. El asunto conciliado versa sobre un derecho de contenido particular y económico y por tanto de libre disposición por las partes, sin que con ello se afecte derecho fundamental alguno o vaya contra la Ley o la jurisprudencia, toda vez que proviene de una obligación contraída por las partes conforme a la normatividad existente en materia laboral.

2.4. El acuerdo aquí celebrado no resulta lesivo para el patrimonio público, por cuanto la entidad convocada tiene el deber de reconocer a la convocante, el derecho que le asiste al pago del valor correspondiente a la sanción por la mora en el pago de la cesantía parcial que solicitó, pero al llegar a un arreglo con la parte interesada, previo a iniciar una acción judicial se está evitando condenas y perjuicios a futuro, como el pago de intereses moratorios o los gastos en que tendría que incurrir para defensa de la entidad dentro del proceso, e incluso una posible condena en costas y agencias en derecho.

2.5. Por tratarse de un acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no es preciso hablar de caducidad de la acción. (Literal d, del numeral 1 del art. 164 del CPACA).

3. MARCO NORMATIVO SANCION MORATORIA:

Analizada la normatividad aplicable a la sanción moratoria, por la tardanza en el pago de las cesantías conforme lo dispuesto por la Ley 1071 de 2006, vemos que en sus artículos 4 y 5, dispone:

“ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación

dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.” (Subrayado fuera de texto).

El plazo en comento se consagró de manera perentoria, previendo que su incumplimiento da lugar a una indemnización moratoria, consistente en el pago de un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.

Recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió el 18 de julio de 2018, la Sentencia de unificación por importancia jurídica¹ en la que precisó las hipótesis sobre la exigibilidad de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, así:

“i) Hipótesis de falta de pronunciamiento, o pronunciamiento tardío.-

83. Sobre el particular, la Sección Segunda evidencia con relación al reconocimiento de la sanción moratoria tanto a docentes del sector oficial, como a la generalidad de los servidores públicos, que aún falta por precisar el momento a partir del cual se hace exigible la sanción por mora en el evento en que la administración guarde silencio frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas, o se pronuncie de manera tardía.

(...)

92. Es preciso indicar así, que el establecimiento de un término para el reconocimiento de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo, busca proteger al trabajador garantizando el cometido de tal prestación, y que justamente con ella, se pueda solventar la eventualidad para la cual la solicitó -parciales- o por la que se causó -definitivas-.

93. Así las cosas, no pueden confundirse los mencionados términos de expedición del acto de reconocimiento de la cesantía y de su pago efectivo, con el previsto por el legislador con el propósito de configurar una decisión presunta resultado del silencio administrativo, y menos para entender causada por ésta la sanción por mora; pues, ésta penalidad se encuentra justificada por el simple incumplimiento de la obligación de pago, no por la ficción legal de que la petición que sobre tal prestación se hizo no tuvo respuesta, asumiéndola como negativa por definición. 94. En criterio de la Sala, éste debe ser el real entendimiento de la sanción moratoria por no expedir el acto de reconocimiento en término, pues lo contrario sería asumir que la simple inacción de la administración impediría la causación de la penalidad analizada en esta sentencia, en detrimento de la filosofía de la cesantía y de los derechos del trabajador.

95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/200622), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 201123) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 SUJ-012-S del 18 de julio de 2018 Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Actor: Jorge Luis Ospina Cardona Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 5124], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

ii) Hipótesis de acto escrito que reconoce la cesantía. -

96. Teniendo claridad sobre la regla que procede para calcular la sanción moratoria por falta de expedición del acto de reconocimiento, o siendo tardío, adicionalmente deberá la Sala analizar la causación de la penalidad en el evento de que exista acto escrito de parte de la administración que reconoce la cesantía, sí se notifica o no, a través de qué medio o, si se renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, considerando que éstos son los momentos en que legamente se inicia el término para controvertirlo y después verificar el pago oportuno de la cesantía.

97. Debe partirse de la base que se está ante el acto administrativo escrito que reconoció la cesantía expedido dentro de los 15 días que se tienen para resolver el asunto. Es de considerar, que este acto al ser de naturaleza particular debe ser notificado personalmente²⁶ en los términos del artículo 6727 del CPACA, para lo cual el ente gubernativo tuvo que consultar el contenido de la petición sobre el particular, esto es, sí el peticionario habilitó la notificación por medio de electrónico, en cuyo caso, se surtirá a través de éste medio; o si por el contrario deberá acometerse conforme a la norma procesal.

(...)

102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos señalados. (...)

109. Siguiendo esta misma línea, se encuentra la hipótesis de cuando el peticionario renuncia expresamente a los términos de notificación y de ejecutoria, procurando así un ágil cumplimiento del acto que le reconoce la cesantía, adquiriendo firmeza a partir de la fecha en que haga tal manifestación, al tratarse de oportunidades asociadas al debido proceso que le permite enterarse de la decisión y controvertirla. En este caso, los 45 días para que se produzca el pago de la cesantía reconocida, corren a partir del día siguiente en que renuncia a los términos de notificación y ejecutoria. (...)

111. En las mencionadas situaciones, los términos de notificación y de ejecutoria no corren para sanción moratoria...”

Acorde con dicho precedente, se debe analizar cada caso en concreto a efectos de establecer el cómputo para la sanción moratoria, de suerte que si el acto administrativo de reconocimiento es proferido dentro del término legal conferido, los 45 días para el pago de las cesantías comienzan a contarse desde su firmeza; pero si el acto se expide fuera del término, por culpa de la entidad y no del solicitante, el tiempo comienza a contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición, es decir, 15 días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más 10 días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, más 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 70 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.

De acuerdo con el material probatorio allegado se tiene que la señora DIANA MARCELA ÁVILA TORRES, en su condición de docente oficial el día 27 de noviembre de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía parcial, tal y como se indica en la Resolución No. 2190 del 26 de marzo de 2019, mediante la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaria de Educación del Distrito, reconoció y ordenó el pago de la cesantía parcial solicitada por la actora y el dinero fue puesto a disposición para el pago el 15 de mayo de 2019.

Dando aplicación a los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006, y el precedente citado, se concluye que, en el presente caso se configuró la mora en el pago de la cesantía parcial reconocida a la actora, toda vez que la expedición del acto y pago se hizo por fuera del plazo establecido, en consecuencia, se determinarán los días de mora, así:

Término	Fecha	Caso concreto
Fecha de la reclamación de las cesantías parciales	27/11/2018	Fecha de reconocimiento: 26/03/2019 Resolución No. 02190 Fecha en que se puso a disposición los dineros: 15/05/2019 Período de mora: 04/03/2019 a 15/05/2019
Vencimiento del término para el reconocimiento - 15 días (Art. 4 L. 1071/2006)	18/12/2018	
Vencimiento del término de ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87 CPACA)	03/01/2019	
Vencimiento del término para el pago - 45 días (Art. 5 L. 1071/2006)	08/03/2019	

La Resolución de reconocimiento de la prestación, se profirió de manera tardía por parte de la entidad accionada, pues, ella contaba con quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de la prestación por el actor, es decir, que tenía hasta el 18 de diciembre de 2019, para expedirla, y lo hizo, solo hasta el 26 de marzo de 2019.

Es así que en este caso, el tiempo a partir de la cual empieza a correr el término, para que se genere la indemnización moratoria, deberá contarse desde el día en que la actora radicó la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías, es decir, desde el 27 de noviembre de 2018, ya que, la fecha límite que tenía la entidad accionada para realizar dicho pago, sin incurrir en mora, era el 4 de marzo de 2019, momento desde el cual, debe computarse la sanción solicitada.

Por lo tanto, el período va desde el 8 de marzo de 2019, hasta el 14 de mayo de 2019, día anterior a que la entidad puso a disposición el dinero para el pago. De esta manera, se tiene que la entidad incurrió en mora de sesenta y seis días, los cuales está obligada a pagar, en forma independiente al monto de las cesantías y con sus propios recursos.

Por lo tanto, este despacho concluye que el acuerdo al que llegaron las partes se ajusta a derecho y que no resulta lesivo al patrimonio público, toda vez que el reconocimiento realizado no supera el valor al que tendría derecho la actora por concepto de la sanción moratoria que se reclama; toda vez que el acuerdo final de las partes fue por la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$6.951.997)**, motivo por el cual aprobará el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora DIANA MARCELA ÁVILA TORRES y la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, se satisfacen los requisitos exigidos para disponer del presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría 132 Judicial II para Asuntos Administrativos, celebrada el 21 de abril de 2022, entre la señora DIANA MARCELA ÁVILA TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía 40.041.298 y la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$6.951.997)**, en la forma y términos indicados en el acta de conciliación extrajudicial y conforme a las consideraciones aquí expuestas.

SEGUNDO: Por secretaría, expídase a la parte convocante copia auténtica que presta mérito ejecutivo del acuerdo conciliatorio y de la presente providencia junto con su respectiva constancia de ejecutoria.

TERCERO: Por secretaría, expídase copia auténtica del acuerdo conciliatorio y de la presente providencia, con constancia de ejecutoria, destinada a la entidad convocada.

CUARTO: Reconocer personería adjetiva a la abogada Kelly Nathally Cruz Sierra, identificada con la cédula de ciudadanía 1.234.641.403 y portadora de la tarjeta profesional 372.610 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del convocante, de conformidad con el poder aportado.

Por Secretaría, dispóngase lo pertinente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

JNE

**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

**Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior
Hoy 10 de junio de 2022 a las 8:00 a.m.**

Convocante:	diana.avila@gmail.com roanotificacionesprocuraduria@gmail.com roaortizabogados@gmail.com
Convocada MINISTERIO DE EDUCACIÓN	notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co